

GRATUIDAD ALIMENTARIA EN CRISIS. ANOMIAS ECONÓMICAS DURANTE LA PANDEMIA 2020, EN ENTRE RÍOS, ARGENTINA

ALIMENTARY GRATUITY (IN CRISIS). ECONOMIC ANOMY
DURING PANDEMIC 2020, IN ENTRE RÍOS, ARGENTINA

ANDRÉS DAPUEZ*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0253-9619>

Fecha de entrega: 06 de febrero de 2023

Fecha de aceptación: 20 de abril de 2023

RESUMEN

El principal objetivo de este artículo es describir y analizar la creación estatal de gratuidad alimentaria por parte de los estados nacionales, provinciales y municipales, durante los primeros 6 meses de la pandemia COVID-19, como evocación de crisis anteriores. En pocas palabras, intento promover la descripción de los fundamentos de las economías de la gratuidad, aneconomías y antieconomías por las cuales esta y otras crisis son normalizadas por medio de la distribución gratuita de comida.

PALABRAS CLAVE: *distribución de alimentos, gratuidad estatal, pandemia*

* Andrés Dapuez (PhD y MA en Antropología Sociocultural, Universidad Johns Hopkins) trabaja como investigador de tiempo completo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Sus principales objetos de investigación son las transferencias monetarias, el dinero, el capital, los diferentes regímenes de futuro, anticipación ritual, promesas y Economías del Catolicismo. Contacto: afdapuez@fceco.uner.edu.ar

ABSTRACT

The main objective of this article is to describe and analyze the invention of food gratuity, by national, provincial and municipal states, during the first 6 months of the COVID-19 pandemic, as an evocation of previous crises. In short, I intend with this paper to promote the description of the foundations of economies of gratuity, aneconomies and anti-economies by which this and other crises are normalized through the distribution of free food.

KEYWORDS: *Food Distribution; State Gratuity; Pandemics.*

En la serie de crisis evocadas, el Programa Alimentario Nacional (PAN) de 1984 prepondera. Al referir a una crisis alimentaria y económica producida por la dictadura parece haber transformado discursivamente el acceso a la comida en derecho constitucional y así garantizar “ciertos derechos sociales mínimos” como paliativos de la pobreza, pero también como instrumentos compensatorios “para forjar un nuevo pacto social” (Adair, 2020, pp. 46-55). Así, el PAN refirió a una crisis previa como razón de su existencia. El Programa Argentina contra el Hambre (PACH) parece haber seguido la misma finalidad. Anunciado el mismo 10 de diciembre de 2019 que asumiera el presidente Alberto Fernán-

dez e implementado el 18 de diciembre de ese año mediante la entrega de 7 000 tarjetas para la compra alimentos, en Concordia, Entre Ríos, entonces la ciudad con más pobreza de Argentina, también refirió a un estado crítico de pobreza que, producido por el gobierno anterior, debía modificar.

Si bien es probable que el virus COVID-19 llegara a prácticamente cada rincón del planeta, las experiencias y respuestas estatales y sociales a la pandemia no fueron las mismas en cada lugar. Como lo sostienen Fassin y Fourcade (2021) en el volumen *Pandemic Exposures*,

[t]enemos que recordar que, a pesar del alcance global del virus, la pandemia pareció ser escasamente registrada en lugares plagados con cataclismos en desarrollo –tales como Haití, Yemen y Sudan, los cuales son tomados en este volumen {2021}, pero también en el Medio Oriente y África Central. Tenemos también que recordarnos a nosotros mismos que el hecho de concentrarnos en el virus produjo sus propios puntos ciegos, oscureciendo la mucho más grave y mucha más ordinaria situación que enfrentan los pobres en cualquier lado. Para ellos el COVID no cambió nada, o muy poco. (p. 5)

Consecuentemente, las respuestas estatales y sociales a la crisis sanitaria planteada por el COVID-19 variaron radicalmente en países con muy baja pobreza como por ejemplo Suiza y Nueva Ze-

landa.¹ En conjunto, las medidas implementadas para coordinar la emergencia COVID-19 parece haber sido influidas más por fantasías de control biopolítico que una sola razón epidemiológica, homogénea y universal. Así, los repertorios imaginarios del estado, de lo que es y debe ser un estado para cada sociedad, se impusieron por sobre las soluciones protocolizadas, por otra parte, siempre contradictorias y cambiantes. Al mismo tiempo que aparecieron puntos ciegos de política, la excepcionalidad permitió una redefinición de lo “normal” y de lo “crítico”.

Algunos repertorios de gratuidad alimentaria (familiar, escolar, eclesial y militar) probablemente estén profundamente arraigados en la sociedad argentina. Los mismos no dependen de un solo partido político. Sin embargo, las respuestas del partido gobernante Frente de Todos a la crisis por COVID-19 implicó distribución gratuita de comida por parte del estado para facilitar el confinamiento impuesto a ciertas poblaciones, reactivando una serie de repertorios históricos que se remontan a la crisis económica de 2001, y tal vez más allá. Así, los dirigentes actualizaron temores

de que pudiera producirse un “estallido social”, activando ayuda alimentaria que se objetivó en una masiva distribución de “bolsones de comida”. En este caso, algunas de las “anomias argentinas”, que Ricardo Sidicaro describiera (2015) aparecen relacionadas a procesos que hacen “legible” a una parte de la población (Scott, 1998). Anomia y legibilidad estatalmente producidas, tuvieron que ver más con la actualización de repertorios políticos de gratuidad que con las características contagiosas y a veces letales del SARS-COV 2.

En este artículo elaboro, a partir de entrevistas en profundidad con funcionarios y líderes barriales, algunas hipótesis sobre cómo el gobierno previó la crisis económica que provocaría el confinamiento y la pandemia. Consecuentemente, las medidas de reducción de movilidad, tomadas para aminorar los contagios del virus, dependieron de distribuciones gratuitas de comida entre los sectores más vulnerables. Realizar entrevistas en profundidad a referentes e integrantes de organizaciones sociales de Paraná, Entre Ríos, me permitió profundizar el análisis de las distintas interpretaciones de la crisis sanitaria y social prevista a fines de marzo del 2020 para, por lo menos, el resto de año. Las mismas fueron realizadas durante el 2020 y el 2021 en encuentros virtuales grabados en *Zoom* y *Meet*. La construcción del presupuesto de un grupo familiar en un barrio vulnerable de la ciudad de Paraná (Dapuez, 2023) me permitió comparar las proyecciones estatales

1. Durante noviembre del año 2021, en un evento académico, uno de mis colegas suizos me manifestaba irónicamente, cuando le pregunté sobre las casi nulas restricciones al movimiento y el muy breve cierre de las escuelas que habían tenido en ese país durante la primavera del 2020, que “en Suiza preferían contagiarse antes que dejar de educarse y comerciar”.

para la asistencia social de sus ciudadanos más pobres y la efectiva recepción de esta en un caso particular. La información recolectada fue completada por medio de entrevistas semiestructuradas y en profundidad a beneficiarios, intermediarios de organizaciones sociales y funcionarios públicos, en persona. Utilicé también datos públicos, correspondientes a la provincia de Entre Ríos, con énfasis especial en su capital, Paraná, y datos de una encuesta realizada en once aglomerados urbanos obtenidos en el marco de la investigación “Territorios, relaciones intergubernamentales y políticas” financiada por La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Por último, analicé distintas posibilidades de representar el tratamiento estatal de las situaciones sociales de pobreza en términos de anomías económicas, economías de la gratuidad (y agradecimiento) y de anti-economías argentinas, siguiendo una larga tradición sociológica de reflexión sobre las anomías y crisis argentinas.

"ECONOMÍA" VERSUS "VIDA" EN EL ESCENARIO NORMAL-CRÍTICO ARGENTINO

En Argentina y desde marzo del 2020, el Estado incrementó su asistencialismo a la pobreza ante los temores de sus funcionarios de hambrunas, saqueos y conflicto social en los barrios más pobres. Muchos ciudadanos encarnaron también, aunque sea momentáneamente, los imperativos de un Estado cuyo reperto-

rio había sido marcado por crisis económico-sociales y consecuentes estados de excepción, tales como los del 2001, 1995, 1989, etc. Tal como lo plantea Trnka (2021), dichos estados de emergencia son actuados y sobreactuados por funcionarios y ciudadanos:

[I]as indagaciones académicas de los estados de emergencia remarcan cómo el imaginario de las crisis (cf. Kosellec, 2006; Roitman 2013) es empleado injustificablemente para expandir el poder estatal (Foucault, 2004; Agamben, 2005, 2020; Chomsky, 2020), muchas veces describiendo a la ciudadanía como débil o engañada por la propaganda estatal. Tales representaciones se arriesgan a eclipsar cómo los ciudadanos pueden no solamente desear estados de emergencia (Fassin, 2012; Appadurai, 2020) sino también actuar como sus adeptos, infractores, críticos, árbitros, y ejecutores. (pp. 368-369)

En el caso argentino, funcionarios y ciudadanos, en distintas medidas y según sus distintas capacidades, utilizaron la crisis que el COVID-19 anunciara a futuro para actualizar otras crisis. Al comienzo, no solamente la coalición gobernante recuperó de sus repertorios iliberales y corporativistas un esquema de economía de la gratuidad. También lo hizo buena parte de la población. La palabra “crisis” (y sus derivados más concretos que objetivaron el pánico moral de las clases medias y gobernantes: “saqueos”, “estallido social”, “inestabilidad”, “movimientos destituyentes”,

etc.) resurgieron en el país con siniestra familiaridad.

Visakovsky y Zenoby (2010, p. 380) notan que “crisis” es parte del léxico diario de los argentinos, pero también mencionan que, en el contexto de la campaña nacional de prevención COVID-19, la invocación a términos tales como “solidaridad” y “cuidado” sirvieron para restaurar un “pasado afortunado” que indicaba un tiempo previo a “la crisis económica” desatada durante el gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, los pasados evocados y los futuros imaginados durante los periodos excepcionales no solamente se remontan mucho más allá del gobierno de Macri, sino que trajeron a la memoria a un *illo tempore* no solamente anti-neoliberal (Muir, 2021, p. 5), sino también anti-mercantil y hasta anti-económico que gran parte de la sociedad argentina consideró como normal durante los primeros días de confinamiento. Las transferencias de dinero, alimentos y otras mercancías, desde el Estado a los más pobres, para que los mismos no salieran de sus casas, de sus barrios, marcaron lo normal de una crisis que se extendió por varios meses.

En este sentido y para evitar movilidad y contagios de COVID-19, el presidente de Argentina enunció una dicotomía excluyente. La misma gozó de consenso social entre quienes identificaron “la vida” con alguna forma de gratuidad antieconómica y la pudieran oponer a “la economía” y a la muerte anunciada por el virus. La elección de

la “vida” por sobre la “economía”, la manifestó Alberto Fernández de la siguiente manera el 23 de marzo del 2020: “Muchos me decían que iba a destruir la economía con la cuarentena. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. Después veremos cómo ordenar la economía” (Perfil, 2020).

Para un análisis más preciso de ese enunciado será necesario recuperar el mecanismo interpretativo, Lacaniano y conspirativo que Muir (2021) señala como típico de las clases medias argentinas, a las que pertenece, por otra parte, el presidente Fernández y la mayoría de la dirigencia del Frente de Todos. Según esta autora para definir las crisis rutinarias, las clases medias argentinas recurren a “prácticas de interpretación psicoanalíticas y conspirativas, [ya que] encuadraron a la crisis no como una ruptura momentánea sino como la realidad perdurable que desencadena la vida nacional” (p. 61).

Al presentar una disyuntiva entre economía o vida, Alberto Fernández remite a una dicotomía extrema. Aunque podría estar solamente refiriendo a una ruptura temporal, al priorizar un término (en este caso con la elección de “la vida”) por sobre otro (“la economía”, que se recuperaría según su razonamiento en otro momento), el presidente evoca una serie de equivalencias perdurables (vida = no economía; muerte = economía; economía = no vida; anti-economía = vida). Al hacerlo, parece activar un mecanismo discursivo excluyente por el cual se disimula que vida y economía son conjuntos que tienen subconjuntos en común.

LA BOLSA O LA VIDA

En su Seminario XI, Jacques Lacan ([1964] 2008) describe y analiza razonamientos falsos, sustentados en la fantasía de una elección entre supuestos dicotómicos y excluyentes. En la clase 16, Lacan analiza el vel (operador lógico “v”; dicotomía lógica alienante). En la conocida escena de un robo, un asaltante le hace elegir a su víctima entre la bolsa o la vida. Al demostrar que aún quien estuviera dispuesto a perder la bolsa, a desatender su economía en este caso, deberá también resignar una buena parte de su vida, la que sería afectada por perder su dinero, Lacan denuncia una falsa “operación lógica” en la disyuntiva del atacante. Esta es definida como una operación de “no reciprocidad y de torsión en el retorno” cuyo mecanismo implica que “una falta generada en el tiempo precedente [la bolsa que] sirve para responder a la falta suscitada en el tiempo siguiente [la vida]” (p. 219).

En el presente de la enunciación presidencial, la economía se sacrificaría en pos de la vida. No obstante, tampoco se podría asegurar lógicamente que elegir la vida por sobre la economía no implicaría pérdidas económicas y de vidas. Si bien sostener que una pérdida en uno de los conjuntos, en el económico en este caso, pudiera asegurar lógicamente una ganancia de vidas humanas en el otro, tal vez el presidente imaginó o quiso hacer creer, en ese momento, que economía y vida respondían conjuntos de experien-

cias aisladas. Al asimilar la economía a la muerte, y la vida a una anti-economía, su discurso moralizante apeló a un imaginario argentino en el que se aprecia el cuidado gratuito y desinteresado como ideal.

Federico Neiburg (2020) sostiene que numerosas relaciones entre “vida y economía” que, hasta la crisis COVID-19 parecían haberse mantenido “por fuera las disciplinas sociales se han convertido en cuestiones estratégicas, no solamente para nuestros trabajos como científicos sociales sino y sobre todo para repensar nuestra existencia colectiva” (s/p). Con discursos moralizantes que subsumieron al dominio económico bajo la biopolítica de emergencia, y al mercado bajo la hegemonía del estado, no solamente la *doxa* discursiva del Frente de Todos se manifestó en forma de disyuntiva. No solamente se puso en suspenso a la búsqueda de lucro y a la temporalidad económica en general. Durante el periodo popularmente denominado como “cuarentena”, al riesgo se le adjudicaron características mercantiles en Argentina. Durante esos primeros meses, la zona de exclusión entre economía y vida se intensificó, a veces, activando repertorios anti-mercantiles y anti-económicos de larga data en la sociedad. Ante lo anómalo de no tener posibilidades de moverse para comprar y vender en los centros de las ciudades, la distribución estatal y política (gratuitas y antimercantiles), con énfasis en los barrios populares, se multiplicaron. Sin embargo, en estos el comercio no se detuvo. La transferencia

extraordinaria de recursos desde el estado hacia las clases bajas se capitalizó. En los barrios populares algunos de los alimentos fueron monetizados, es decir, vendidos por debajo de su precio de mercado porque se los consideró racionalmente redundantes. Especialmente los alimentos secos (fideos, arroz, latas de conservas) se cambiaron por dinero al ser considerados que sobraban.

Por medio de transferencias lineales, unidireccionales y gratuitas, el estado nación no solamente redistribuyó dinero, a través de transferencias monetarias, sino que también aumentó exponencialmente las cantidades de alimentos y productos de higiene en los barrios carenciados. Con el fin de sostener la limitación de la movilidad de los ciudadanos más pobres, cuyos límites fueron fijados por fuera de estos barrios mediante el despliegue de fuerzas de seguridad, el estado intentó desmercantilizar aún más dinero y alimentos a través de estas transferencias. Al mismo tiempo se ordenaba “quédete en casa” y se restringía la posibilidad de comprar mercancías en el centro de la ciudad, transferencias en especie, principalmente de comida seca pero también de productos de higiene, viajaban desde depósitos privados hacia los estados (nacional, provincial y municipal) y desde las organizaciones sociales que dichos estados habían previamente contactado, hasta las personas en situación de vulnerabilidad para que éstas se quedaran en el barrio (ya no en la casa, como se le ordenara a las clases medias y altas). Supuestamente, esta li-

mitación diferencial de movilidades de clases controlaría la posibilidad de contagios. Aunque al interior de los barrios vulnerables su proyección de contagios sería casi imposible de controlar, las posibilidades de “estallido social”, viejo temor de las dirigencias argentinas² se podrían aminorar por medio de transferencias de recursos.

Siguiendo una lógica alienante de disyunción absoluta entre economía y vida, las transferencias en especie y en dinero tuvieron como principal objetivo sobrerrepresentar las capacidades de cuidado biopolítico del Estado. Basado en falsas dicotomías, falsas porque ninguna de las opciones le asegura a quien la elige estar a salvo de una pérdida parcial o total en la otra, el partido gobernante actualizó un repertorio iliberal de gratuidad política. Por cierto, el mismo no era desconocido para una buena parte de la sociedad. Describiéndose como reproductor directo de la vida de los sectores más vulnerables de la sociedad e implementando políticas de gratuidad que trascienden a los tiempos excepcionales del manejo de la pandemia, el estado se presentó a sí mismo como la alternativa excluyente al mercado. La crisis y ex-

2. En marzo de 2020 fui incorporado a un grupo de WhatsApp en el que numerosos investigadores informalmente discutimos escenarios futuros que podrían materializarse a partir de la pandemia, el confinamiento y el empeoramiento de la crisis económica. Las palabras “estallido social” aparecieron y se repitieron. La mayor cantidad de soluciones que se pusieron al alcance en ese grupo fueron teniendo en cuenta ese escenario catastrófico.

cepcionalidad del COVID-19 demuestran, aunque fuera por unos días, que una de las funciones del Estado no es solamente la de proveer de alimentos gratuitos a los pobres (a través de “bolsones de comida”), sino la más trascendental de producir gratuidad estatal.

CRISIS DE REPRESENTACIÓN ECONÓMICAS

A continuación, presentaré datos estadísticos sobre pobreza y pobreza alimentaria (o indigencia), necesarios para objetivar la evolución de las crisis económicas en Argentina. Obtenidos y procesados por el estado nacional desde 2016, estos no solamente sirven de contexto a las proyecciones que los funcionarios hicieran para tomar medidas de restricción de la movilidad en marzo del 2020. También son útiles para cuantificar una preocupación central de la política argentina de las últimas décadas: la inmersión en la pobreza de casi la mitad de la población. Los sentidos de las economías de la gratuidad producidos por el estado argentino dependieron también de poner en crisis a la representación de las crisis económicas.

Las estadísticas del desempeño económico del país, pero sobre todo de la pobreza, se volvieron centrales para la política argentina cuando los datos económicos oficiales se comenzaron a manipular y a silenciar, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández (2011-2015). En dicho periodo se intervino el Instituto Nacional de Estadísti-

cas y Censos (INDEC) para adulterar y, luego, dejar de publicar en 2013, las mediciones de pobreza. Puede leerse una breve reseña retrospectiva de la producción anómala de índices estadísticos en un sitio web que tiene como objetivo la desambiguación de noticias polémicas:

La subestimación de la inflación también impactó en la medición de la pobreza, dado que el cálculo de la canasta básica se actualiza con la inflación, la cual finalmente en 2013 dejó de publicarse. Según informó entonces el INDEC en un comunicado, esto se debió a “severas carencias metodológicas” y por la incapacidad oficial de empalmar (es decir, volver comparables) dos series del IPC [Índice de Precios al Consumidor]. Sin embargo, el entonces ministro de Economía y actual precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló en una entrevista que medir la pobreza era “estigmatizante”, y dijo que volverían a publicarse los datos, algo que nunca ocurrió bajo su gestión hasta 2015. (Slipeczuk, 2019, párr. 5)

La representación estadística de la pobreza (y la indigencia) se volvió un tema central del debate político cuando los porcentajes comenzaron a crecer en el 2011, pero, sobre todo, cuando estos índices fueron discontinuados en 2013. En 2015, después de que Mauricio Macri asume la presidencia (2015), se normaliza su producción en el INDEC.³

3. Jorge Todesca en una columna de Clarín mani-

El gobierno de Alberto Fernández, que empieza en 2019, con la vicepresidencia de Cristina Fernández, mantiene el funcionamiento regular del Instituto. A cargo de Marco Lavagna, el INDEC si bien deja atrás etapas de crisis de representación de los datos econométricos, la serie de los índices de pobreza posteriores a 2016 siguen siendo preocupantes para la opinión pública porque no dejan de incrementarse.

Si se toma como inicio al segundo semestre de 2017, los porcentajes de pobreza comienzan a crecer desde un piso del 17,9 % de los hogares y 25,9 % de las personas bajo la línea de pobreza (3,5 % y 4,8 %, hogares y personas considerados como indigentes). En el segundo semestre del 2021 se puede encontrar una reversión temporaria de la tendencia al alza.

Cuadro 1. Pobreza e indigencia.

Indicador	2° semestre 2016	1° semestre 2017	2° semestre 2017	1° semestre 2018	2° semestre 2018	1° semestre 2019
% Pobreza						
Hogares	21,5	20,4	17,9	19,6	23,4	25,4
Personas	30,3	28,6	25,7	27,3	32,0	35,4
Indigencia						
Hogares	4,5	4,5	3,5	3,8	4,8	5,5
Personas	6,1	6,2	4,8	4,9	6,7	7,7

Total 31 aglomerados urbanos
 Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.
<https://www.indec.gob.ar/>

El incremento de los índices de pobreza e indigencia, en el segundo semestre del 2020, se debe, seguramente, a crisis económica previa (2018), más a las dificultades provocadas por las disposiciones de restricción de la circulación y confinamiento tomadas por el ejecutivo nacional en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Los de indigencia de este periodo, sin embargo, no son los más altos de la serie arriba graficada. Estos tocan su mayor valor en el primer semestre del 2021.

festaba: "Hicimos frente al sistema estadístico que recibimos: con su fiabilidad menoscabada desde el mismo Estado y con sus datos puestos en entredicho, dentro y fuera de Argentina. Si la situación en la que estaba el INDEC en 2015 se hubiese prolongado un poco más, no lo recuperábamos. Estuvimos muy cerca de eso" https://www.clarin.com/opinion/estadisticas-oficiales_0_z7Ofp5_-7.html

Cuadro 2. Pobreza e indigencia.
Total 31 aglomerados urbanos

Indicador	2° semestre 2019 (1)	1° semestre 2020	2° semestre 2020 (2)	1° semestre 2021	2° semestre 2021
Pobreza					
Hogares	25,9	30,4	31,6	31,2	27,9
Personas	35,5	40,9	42,0	40,6	37,3
Indigencia					
Hogares	5,7	8,1	7,8	8,2	6,1
Personas	8,0	10,5	10,5	10,7	8,2

(1) Los resultados del segundo semestre de 2019 no incluyen el aglomerado Gran Resistencia (ver punto “Acerca de la cobertura geográfica” en el anexo metodológico del informe técnico *Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre de 2019*).

(2) Los resultados del segundo semestre de 2020 no incluyen el aglomerado Ushuaia-Río Grande (ver punto “Acerca de la cobertura geográfica” en el anexo metodológico del informe técnico *Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Segundo semestre 2020*).

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.
<https://www.indec.gob.ar/>

La leve tendencia a la baja, entre el segundo semestre del 2020 y el primer semestre del 2021 con respecto a la categoría hogares (pasa del 31,6 % a un 31,2 %) y personas (pasa de un 42,0 % a un 40,6 %), parece mantenerse una vez que las restricciones de la ASPO y la DISPO desaparecen. La tendencia a la baja de la pobreza e indigencia se consolida a partir de estos periodos. Según el Cuadro 4.3. “Pobreza en hogares y personas. Regiones estadísticas y 31 aglomerados urbanos”, publicado por el mismo INDEC, la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, pasa de un 26,5 % de hogares y un 36,1 % bajo la línea de la pobreza en el segundo semestre del 2017 a un 40,7 % de hogares y un 51,1 % de las personas bajo esa línea, en el segundo semestre del 2019. Para el primer semestre del 2020 los valores son un 40,6 % y 52,2 % de hogares y personas pobres, respectivamente.

Para el segundo semestre del mismo año 2020 se nota un leve descenso. Los valores pasan a 39,3 % y 49,5 % de hogares y personas bajo el nivel de la pobreza en Concordia. En el primer semestre del 2021 vuelven a subir: 44,4 % y 56,1 %, hogares y personas pobres para bajar aproximadamente un 4 % en el segundo semestre del mismo año. De la jurisdicción estadística denominada por el INDEC “Gran Paraná”, Entre Ríos, de la que a continuación daré más detalles; en el segundo semestre de 2017 se indica un 12,1% y 18,6% de hogares y personas pobres. El primer semestre de 2020: 26,6 % y 36,3 %; mientras que

en el segundo semestre: 30,4 % y 40,9 % para bajar a 27,8 % y 37,0 % durante el primer semestre del 2021 y al 21,8 % y 29,8 % de hogares y personas pobres en el segundo semestre del 2021.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) había establecido para enero 2020 al SMVM en \$16.875,0. A partir del 1° octubre de 2020 resolvió modificarlo en \$18.900,00. Otro parámetro importante para determinar y modificar situaciones de pobreza e indigencia es la Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total. La primera determina numéricamente la línea de indigencia (o inseguridad alimentaria) para un adulto. La segunda, la línea de pobreza también para un individuo también adulto. Para enero del 2020 la Canasta Básica Alimentaria era de \$5.333 para enero 2020 y \$6.702 para octubre 2020. Mientras que la Canasta Básica Total era de \$13.066 para enero 2020 y de \$16.153 para octubre 2020. En 2020 el gobierno nacional tomó también como base para determinar la cifra que otorgaría a los trabajadores imposibilitados de ejercer su actividad durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) el monto del salario mínimo. Cerca de 1,6 millón de trabajadores del sector privado recibieron el pago del salario complementario correspondiente al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se destinaron también tres bonos de \$10.000 a

casi nueve millones de Ingreso Familia de Emergencia (IFE).

Estos números, y sus ausencias, no solamente ponen en cuestión la posibilidad de una elección discreta entre la vida o la economía. También muestran que los usos de las políticas de gratuidad estatal representan y contienen a una población en estado de pobreza crónica.

EL SENTIDO DE LA ANOMIA ECONÓMICA: UN ESTADO PARA LAS CRISIS

Una de las características del funcionamiento de la alianza gobernante *Frente de Todos* fue la creación de compartimientos estancos a su interior. Desde su asunción en diciembre de 2019, el poder ejecutivo nacional dividió a los organismos del Estado siguiendo una lógica distributiva, denominada comúnmente como “loteo” por los mismos funcionarios. La figura implicaba demarcar un lote de terreno y dárselo para su administración a cada fuerza política. Burocratas de distintas procedencias partidarias e ideológicas, tan distintas como el Opus Dei y el Partido Comunista, representantes de movimientos sociales, del Partido Justicialista, del Frente Renovador, Proyecto Sur, Somos, Movimiento Nacional Alfonsinista, Partido de la Concertación FORJA, Partido Comunista, Partido Comunista (Congreso Extraordinario), Partido del trabajo y el Pueblo, Unidad Socialista para la Victoria, Partido Solidario y Nuevo Encuentro, entre muchos otros, pasaron a formar parte del Estado nacional admi-

nistrando, o intentando hacerlo, una crisis sanitaria y social que terminaría en crisis económica aguda.

En todas las entrevistas en profundidad realizadas para esta investigación (27), con la excepción de una sola con uno de los líderes de la CGT de Entre Ríos, la identificación de anomalías en la coordinación política de las disposiciones contra el COVID-19 emergió como un tema central en las declaraciones de los funcionarios de gobierno y líderes de organizaciones sociales. Durante los periodos denominados “Aislamiento Preventivo y Obligatorio” (ASPO) y “Distanciamiento Preventivo y Obligatorio” (DISPO) en el 2020, una de las preocupaciones principales de estos funcionarios, fue el incremento de la pobreza alimentaria en los barrios vulnerables, la descoordinación de la ayuda alimentaria y la posibilidad de saqueos, movilizaciones populares y estallido social. Por lo tanto, coordinación de la asistencia alimentaria estatal se consideró prioritaria en la ejecución de políticas públicas para inmovilizar a poblaciones vulnerables dentro de sus barrios.

Durante los primeros días de la gestión de la pandemia COVID-19, el presidente argentino Alberto Fernández hace anuncios por televisión y produce una alta cohesión social. Los decretos y resoluciones presidenciales parecen encontrar un modo de cohesionar no solamente a la sociedad argentina, sino también a la coalición que lo llevara al poder. Las medidas en contra del COVID-19 aparentan también resolver problemas

internos. Sin embargo, estos emergerán claramente a mediados del 2020. Al mismo tiempo que el peligro del virus se magnifica, fantasías de desestabilización aparecen en los medios de comunicación. Funcionarios estatales sostenían, por entonces, que la ayuda alimentaria se canalizaba, siempre primero, por un carril políticamente afin y a veces hacia los otros grupos de poder que formaban el mismo gobierno u otros.

En el 2020, un secretario de la gobernación de la provincia de Entre Ríos me comentaba que le daba vergüenza que siendo “todos peronistas” (poder ejecutivo municipal, provincial y nacional) la gestión de los recursos alimentarios fuera tan difícil (o imposible) de coordinar. Al referirse a la coordinación entre municipios, provincias y ministerio de desarrollo del poder ejecutivo nacional, ponía en claro que era muy difícil para los funcionarios de los subgrupos de “la interna” no solamente conseguir “apoyos similares”, sino también hasta recibir la misma información para poder solicitar los alimentos en cuestión. Ya sea en el ejecutivo nacional o de los otros estados (municipal y provincial), los canales de información presentaban silencios programados que hacían difícil la distribución de comida, material de higiene y otros.

En este sentido, un líder de otro movimiento social, en ese momento afin al presidente, sostenía al respecto que ellos tenían la seguridad de que iban a ser siempre quienes primero recibirían los recursos desde el Ministerio de

Desarrollo Social. Antes, o en el peor de los casos, al mismo tiempo, que los secretarios de desarrollo de la provincia y de las municipalidades de Entre Ríos. El apagón informático del Sintys (Sistema Integrado de Información Social) durante los primeros meses del ASPO no solamente agudizó el desconcierto en la implementación de asistencia social,⁴ sino que produjo más silencios y sospechas sobre las herramientas para gestionar y coordinar situación de pandemia, segmentando distintas interfaces de la implementación de políticas. La participación y efectividad en la resolución de problemas concretos por parte de los denominados “movimientos sociales” se maximizó durante el ASPO. En palabras de Hirsch y Mastrángelo (2021):

En todos los casos, los movimientos y organizaciones sociales están tratando con los desafíos cotidianos que la pandemia impuso. Mientras el Estado ha implementado diversas políticas públicas para responder a las demandas de los ciudadanos, muchas fueron frustradas por prácticas burocráticas ineficientes. (s/p)

4. La reiteración del conocido Error 404 en páginas web del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, para conocer la cantidad de beneficiarios de Potenciar Trabajo durante los últimos meses del 2021 y hasta junio 2022 es considerado aquí también como un silencio oficial. El siguiente link ha sido restituido con posterioridad: https://www.datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-potenciar-trabajo/archivo/desarrollo-social_6e9de963-cf95-4555-87af-84f1126e346b

Como resultado de la producción de indiferencia y silencio al interior del estado, comúnmente denominadas “internas” por los mismos funcionarios estatales, los movimientos sociales tuvieron que incrementar su trabajo de petionar recursos a ONGs como el Banco de Alimentos y al mismo Estado nación del que ellos a veces formaban parte también como funcionarios. En este proceso estas “prácticas burocráticas ineficientes” que mencionan las autoras arriba citadas deben ser reinterpretadas en el contexto de internas políticas que busquen un cambio de gestión estatal de lo gratuito. Más que como una serie de errores aleatorios provocados por anomalías fortuitas en la comunicación intergubernamental, la gestión de la crisis alimentaria se llevó a cabo gracias también a las arriba mencionadas estadísticas, y otras evaluaciones de los niveles de alimentación de la población más vulnerable producidas en el terreno, con bastante éxito. Los temidos “estallidos sociales”, “saqueos” y situaciones límites de desnutrición se evitaron.

UNA ECONOMÍA DOMÉSTICA AL BORDE DE LA POBREZA

A continuación, presento el caso de una familia pobre cuyos ingresos mensuales he presupuestado desde hace cinco años. No pretendo que sea representativo de la pobreza en pandemia, sino que permita objetivar el incremento de las gratuidades estatales durante los primeros meses de pandemia.

La historia de esta familia, emigrados a fines de los años noventa desde la ciudad de Santa Elena al cerrar el frigorífico en el que trabajaba la madre de Marina, Carolina (59), al mismo tiempo que actuaba como representante gremial, muestra ciclos de precarización laboral, pobreza y recuperación parcial del ingreso. Estos últimos ciclos de recuperación no solamente se produjeron gracias al emprendimiento ladrillero al que se dedicaron parcialmente, sino que se debió también al trabajo constante de vinculación con diversos organismos estatales, ONGs, y organizaciones sociales. La producción de vínculos sociales y consecución de subsidios fue fundamental no solamente para la subsistencia de este grupo, y de los individuos que lo componen, sino también para el aprovechamiento electoralista y clientelar de varios intermediarios de la representación política. En pocas palabras, este caso de una unidad familiar consolidada en la pobreza, y que por periodos emerge de las líneas estadísticas de la misma, a partir de distintos subsidios estatales (municipales, provinciales y nacionales; periódicos o no), ha logrado una cierta estabilidad en un borde estadístico de la pobreza. Desde ese límite se sumerge o emerge, dependiendo de variables macroeconómicas como el precio del dólar, los diseños estadísticos de las líneas de pobreza e indigencia, los calendarios electorales, creación y distribución de nuevos subsidios (por ejemplo, para atenuar las consecuencias de la violencia de género) y la acumulación de ayudas

y salarios temporales que la misma familia gestiona para ganarse la vida. Este tipo de unidades domésticas situadas no casualmente en las fronteras móviles de la línea de pobreza han sido sistemáticamente premiadas o castigadas por políticas públicas que, a veces han priorizado la distribución como modalidad política clientelar entre los más vulnerables (Murillo et al., 2021), y otras veces se han ensañado con ellas por medio de políticas de austeridad, a veces como instrumentos anti-inflacionarios, para deprimir el consumo de los alimentos básicos, a veces como mecanismos para rebajar el precio de la hora de trabajo en el mercado informal.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina, el ingreso básico por familia de cuatro miembros que viven por encima de la pobreza era para septiembre del 2020 de ARS\$ 45.000; unos US\$ 341; lo que daría un estimado de ARS\$ 11.250 o US\$ 86 mensuales por persona para que esta persona quede por encima de la línea de pobreza según el mismo INDEC. De acuerdo con la línea de ingresos básicos elaborada por el INDEC, las personas que mencionaré en este estudio de caso no son pobres. Cuando realicé las entrevistas presupuestarias, en septiembre del 2020, cada miembro de esta familia recibía un ingreso mensual, en promedio, de US\$117 o ARS\$15.332 (sin mencionar los ingresos en especie como los arriba mencionados u otros ingresos monetarios que no se tuvieron en

cuenta aquí).⁵

En este apartado describo un presupuesto mensual de una unidad doméstica en un claro contexto de pobreza y desigualdad social. Su ubicación en el marco estadístico debería limitar el alcance del análisis, relacionándolo con los otros casos comparables. Así se podría graficar el comportamiento de otros hogares con otros niveles de ingreso durante el mismo periodo. Dicho análisis comparativo, y la posterior ubicación en los marcos estadísticos, permitirá al lector comparar las asistencias que tuvieron durante el ASPO, DISPO y en tiempos de pos pandemia las unidades domésticas de los distintos estratos. Sin entrar en esa comparación, en las siguientes líneas describo, en cambio,

5. El precio oficial del dólar estadounidense era en septiembre del 2020 ARS\$ 80. Sin embargo, los actores no pudieron comprar un solo dólar a este precio. Se trata de un dólar para operaciones oficiales de importaciones y exportaciones. El dólar estadounidense oficial más impuestos y retenciones se vendía en septiembre de 2020 a ARS\$ 132. Legalmente una persona puede comprar solo hasta US\$ 200 a ARS\$ 132, por mes. No todos los habitantes están posibilitados para dicha compra, dependiendo la misma de su capacidad impositiva. Mis cálculos son a ese precio del dólar. Finalmente, está el mercado informal de dólar "Blue" o ilegal, donde cotizó en ARS\$ 147 aproximadamente para ese mes. Un salario de clase media, como el mío, de investigador adjunto de CONICET, para septiembre 2020, era de ARS\$ 59.875: unos US\$ 454 al tipo de cambio de ARS\$ 132 por dólar. Transcribo esas cifras para dar a clarar que el hogar extenso que estoy presupuestando no debe ser considerado como ejemplo de indigencia.

los ingresos monetarios de una unidad doméstica cuyo presupuesto ya antes de la pandemia era constituido por aproximadamente un 70 % de transferencias monetarias, en su mayoría de parte del estado nacional. Además, recibe ingresos en forma de alimentos, provistos por un comedor comunitario. De lunes a viernes, los siete integrantes de esta unidad doméstica comen en, o reciben comida de, un comedor comunitario, en donde se les brinda el almuerzo y la merienda. Algunos días la comida también es suficiente para llevarla a sus hogares y cenar.

Ubicada en una zona de "ladrillerías artesanales" en la periferia de la ciudad de Paraná, Argentina, esta unidad doméstica extendida consta de siete miembros. Si bien las tareas de la ladrillera también implican esporádicamente a los otros integrantes de la unidad, solamente un varón de 39 años (a quien denomino Lautaro) se dedica exclusivamente a la producción y venta de ladrillos, mientras que un varón de 18 años, también en el 2020 (Lucas), realizaba estos trabajos con menor frecuencia. En septiembre de 2020, su principal ingreso mensual provino de transferencias monetarias. El resto, de la venta de ladrillos que manufactura Lautaro. Los siete viven en tres "casas", o en tres habitaciones independientes, distribuidas de la siguiente manera:

A. Marina (38), Lauro (39), Orne (13) y Santi (14) viven en una casa de chapa, plástico y chapas de madera. El ingreso total de la UNIDAD A es de

ARSS\$ 61.367; aproximadamente de US\$465 por mes. [1]

B. En una habitación contigua vive el hijo mayor de Marina, Lucas (18), con su novia, Clara (17), en una precaria “casa” de cartón y plástico. Ingreso total UNIDAD B: ARSS\$ 27.832. aprox. US\$ 211 por mes.

C. En otra casa vive la madre de Marina, denominada acá como Carolina (58). El ingreso total de la UNIDAD C es de ARSS\$ 18.128; aproximadamente US\$ 138 para el mismo mes de septiembre de 2020.

A+B+C= ARSS\$ 107.327, aproximadamente US\$ 813 al mes. Unos, ARSS\$ 15.332 per cápita por mes.

En noviembre de 2021, su principal ingreso monetario mensual también provino de las transferencias de efectivo.

A. Marina (39), Lauro (40), Orne (14) y Santi (15) siguen viviendo en una casa de chapa, plástico y chapas de madera. Sin embargo, están construyendo una nueva casa de ladrillos cerámicos alrededor de la anterior. Invierten buena parte de sus ingresos en materiales de construcción para la nueva casa. Recuerdan el momento de la entrevista anterior (por WhatsApp) y en general toda la época de la ASPO, como momentos muy difíciles, económicamente hablando. A noviembre del 2021 manifiestan estar muchísimo mejor.

Marina percibe en noviembre del 2021:

1 Transferencia en efectivo denominada Potenciar Trabajo ARSS\$ 16.000; US\$92 (a idéntica conversión).

2 transferencias en efectivo de la AUH para sus hijos ARSS\$ 15.000; US\$ 86

2 Transferencias Alimentarias en Efectivo (Tarjeta Alimentar) ARSS\$ 9.000; US\$ 52

Retribuciones variables por limpieza de casas por hora: aproximadamente ARSS\$ 12.000 por mes; US\$ 69, y

1000 ladrillos de su exmarido, en concepto de pensión alimenticia y manutención de los hijos: ARSS\$ 13.000; US\$ 75.

Su pareja Lautaro recibe por mes:

1 Transferencia en efectivo denominada Potenciar Trabajo ARSS\$ 16.000; US\$ 92,

2 Ingresos variables por producción y venta de ladrillos de su “ladrillera”: ARSS\$ 30.000 aproximadamente por mes; US\$ 173.

De este modo el ingreso total de la UNIDAD A es de ARSS\$ 111.000; US\$ 639 mensuales, para el sustento de 2 adultos y 2 adolescentes, también por encima de la línea de pobreza establecida por el INDEC para ese mes de septiembre 2021. Si bien los datos consignados solamente poseen importancia heurística, se pueden ubicar perfectamente en el marco estadístico de la indigencia y pobreza de la provincia de Entre Ríos para septiembre de 2020 y 2021. En el caso de la unidad doméstica consignada, el ASPO no implicó empobrecimiento.

Aunque mi informante señaló en repetidas oportunidades que “la pasaron mal” durante las primeras semanas del ASPO y que la incertidumbre fue enor-

me, el malestar se debió principalmente a la restricción de la circulación y, por lo tanto, a la imposibilidad de hacer “chan-gas” cuando lo consideraran necesario o a la posibilidad de enfermarse. Asimismo, la venta de ladrillos también registró una interrupción súbita. El periodo, sin embargo, fue corto, desde fines de marzo hasta principios de junio. Sin embargo, al incrementarse los ingresos (*vía* transferencias monetarias excepcionales y *vía* incremento en las entregas de alimentos) esta familia extendida pudo realizar algunos ahorros e inversión.

Durante el periodo del ASPO el proyecto de Marina de construir una casa de materiales se hizo realidad. En este asentamiento muchas otras familias parecen haber seguido la misma suerte durante los últimos 2 años. Hasta 2019 la mayoría de las habitaciones estaban hechas con cartón, aglomerado, chapas de zinc y maderas mientras que hoy en día son construidas con ladrillos cerámicos, que los habitantes encuentran mucho más prácticos y baratos que los que se fabrican en el barrio. A fines del 2020 se incrementaron los moradores del asentamiento. La venta de derechos (informales) de uso del suelo contribuyó también no solamente a poblar el asentamiento con nuevos vecinos sino también a capitalizar la antigüedad y el acceso a redes de políticas. De esta manera, las parcelas, algunas de ellas vendidas a \$50.000 (precio julio 2020) constituyeron una fuente de ingresos extraordinarios para quienes, como en el caso de Marina, buscaban mejorar su habitabilidad.

ANTI-ECONOMÍAS ARGENTINAS

Un importante líder sindical del gremio de la construcción de Entre Ríos, en una entrevista, me corrigió, cuando al final de la misma le planté la idea de que una crisis pudiera ser interpretada en términos de oportunidades para cambiar patrones de conductas y estructuras económicas: “nosotros venimos de crisis en crisis... en crisis... y [que las crisis sean oportunidades puede quedar] lindo en los libros, pero no en las [mismas] crisis.”

Según el mismo entrevistado, en los contextos críticos se vive “día a día” y se “programa” solamente para ese día en el que se vive. Es este contexto de inmediatez la asistencia gratuita de alimentos a los más necesitados, provista por el estado directamente, o indirectamente a través de organizaciones sociales, se vuelve más que una función momentánea y transitoria, un imperativo de supervivencia. Las funciones sociales de un estado diseñado para actuar en crisis sucesivas y rutinarias, terminan implicando no solamente un repertorio anti-neoliberal (Muir, 2021, p. 5) sino también anti-mercantil y anti-económico que constituye al discurso de la gratuidad estatal argentina del siglo XX como elogio de la normalidad en la crisis.

Durante el ASPO y DISPO, las autodenominadas “movimientos” y “organizaciones sociales” profundizaron esta lógica, reproduciendo, desde abajo, y a partir de transferencias de recursos, una nueva estatalidad más precaria pero tam-

bién más flexible y adaptable a las incesantes crisis. Los movimientos sociales fueron claves en el proceso de inmovilización de grandes sectores vulnerables o barrios empobrecidos. O, mejor dicho, fueron imprescindibles para reducir la movilidad de personas y de familias a un distrito barrial determinado: la fijación de la población a un “territorio”, tal es la palabra que utilizan los líderes políticos para referirse a lo que está por fuera de las oficinas del estado, presupuso una enorme logística. Por medio de esta, las mercaderías circularon desde depósitos comerciales hacia nodos de distribución, a veces partidarios, a veces estatales, otras de movimientos sociales, con la finalidad de transformarse en comida para los sectores menos favorecidos. Este proceso de desmercantilización implicó, por otro lado, movimientos anteriores de compras o donaciones de alimentos. En algunos casos, y para acelerar la circulación de mercancías, se pagaron precios por arriba de los de mercado.

La noticia del sobreprecio en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social no solamente hizo que se detuvieran las compras, sino que paralizó las entregas desde el Ministerio de Desarrollo Social de la nación por casi un mes y medio.⁶ Este problema en

la compra y en la distribución de los alimentos incrementó el protagonismo de las organizaciones sociales. Las mismas tuvieron que improvisar rifas y ollas populares para recaudar recursos. Iniciaron búsquedas alternativas de comida (en Paraná fueron canalizadas sobre todo desde el Banco de Comida de la ciudad de Santa Fe) y modos de organización en los mismos barrios populares para atender la nueva emergencia que surgía.

También las escuelas y los comedores populares promovieron desmercantilizaciones y gratuidades varias. Al hacerse dificultosa o imposible la movilidad hasta para comprar comida en el centro de la ciudad, durante el ASPO 2020, las escuelas permanecieron abiertas, pero solo como nodos de distribución de alimentos. Si bien cerraron sus aulas y no se dieron clases, las escuelas de los barrios más vulnerables se volvieron centros de distribución de alimentos. En las cocinas escolares se dejó de cocinar, modificándose así la modalidad de la asistencia alimentaria a los estudiantes más pobres. Al pasarse de una alimentación *in situ* de los menores vulnerables hacia una entrega de bolsones alimentarios para el consumo familiar, la demanda de alimentos se incrementó.

6. Las compras cuestionadas fueron de aceite comestible, fideos, azúcar, lentejas y arroz, tramitadas en cinco expedientes y por un total de 543.408.400 de pesos. La denuncia la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostuvo que habrían sido adjudicadas a “un grupo redu-

cido de empresas” que “en su mayoría cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación”. El juez federal Sebastián Casanello descartó la comisión de delito sobreseyendo a Daniel Arroyo, por ese entonces ministro de Desarrollo Social y a otras 17 personas (Telam, 2021).

En este sentido, una directora de escuela en una zona altamente vulnerable de la ciudad de Paraná nos comentaba a principios del 2021 que en,

...marzo del año pasado [2020], estos 40 o 60 [estudiantes] comieron hasta mayo o junio y ahí empezó a aumentar la matrícula de niños que iban al comedor. ¿Por qué? Porque ahí se suspende el plato servido en mesa y se les da viandas preparadas. O sea que los cocineros iban, cocinaban y se les repartía en “*tupper*”, por familia, la cantidad de hijos que tenían. Hay familias que tienen dos niños, tres niños y otros que tienen entre 7 y 8 hijos. Entonces se cocina según un listado, y empezaron, cada vez, mes a mes, a ir más familias a buscar la vianda. Hasta que, aproximadamente en junio, julio del año pasado, no me acuerdo bien en qué fecha, la Dirección de Comedores Escolares de nuestra provincia decide que no se repartan más viandas, que los cocineros eviten ir a cocinar en los comedores porque no se garantizaba ni el distanciamiento, ni el uso de barbijo, ni la *sanitización* de manos... y empiezan a dar los módulos de mercadería.

En ese párrafo encontré momentos precisos en los que varían los regímenes de gratuidad alimentaria, según las circunstancias y las medidas políticas del momento. Los comedores escolares que alimentan a un número determinado de estudiantes suspenden la comensalidad de los menores para entregar viandas de comida, primero, y luego, se deja de cocinar, comenzando a entregar bolsones

de comida “seca” a un número creciente de beneficiarios.

El comedor escolar en el cual los estudiantes comparten un plato caliente y un postre en una mesa se transforma en un centro de distribución de comida en un contenedor de plástico, o *tupper* con comida caliente, que se entrega diariamente al encargado de retirarlo. En esta primera transformación la directora de la escuela nota que ya no son los estudiantes los que se alimentan para tener un mejor rendimiento escolar, sino que son sus padres quienes buscan los contenedores de comida. Aquí también recalca que esos niños y niñas ya no están estudiando. Las clases presenciales han sido suspendidas y las virtuales, a través de *WhatsApp* no pueden realizarse por problemas técnicos y falta de medios. Luego se pasa a realizarse una entrega mensual. Lo que se reparte es una bolsa con comida para ser procesada. Estos cambios se deben principalmente a medidas implementadas por el gobierno provincial. La masividad de las entregas de bolsones son producto de la interface entre las políticas del ministerio de desarrollo nacional y el provincial, sumado a la instrumentación que de dicho dispositivo realiza la Dirección de Comedores Escolares de la provincia de Entre Ríos.

En este proceso de distanciamiento social, el alimento dispensado no solo sufre transformaciones en sí mismo. Pasa de estar caliente, y en una mesa compartida por los estudiantes y docentes, a estar servido en un recipiente, para ser transportado a la mesa familiar, y

luego, frío y no cocinado, para ser preparado por los padres, sus cantidades también se modifican. En una primera instancia las porciones de comida deben incrementarse de 50-60 por día a 200 raciones. Este cambio gradual ocurre cuando el comedor es cerrado al consumo *in situ* y se comienzan a distribuir *tuppers* hacia el exterior de la escuela. En julio del 2020, se suspende la entrega de la comida procesada en *tuppers* y se comienza a entregar módulos de comida envasada. Cada uno de los módulos consiste, en julio del 2020, en un kilo de arroz, un paquete de fideos de ½ kilo, una caja de puré de tomates, una botella de aceite de 900 cc, y un paquete de fideos de ½ kilo, por niña o niño en edad escolar. Luego del primer mes, en agosto, se le suma: una lata de choclo, una lata de arvejas, y una lata de lenteja. También comienza a formar parte del módulo, en este caso en concepto de merienda y desayuno (desayuno que antes también se tomaba en la escuela): una caja de leche en polvo por 900 gr; un pote de mermelada por 400 gr, un paquete de cacao por 180 gr, un paquete de galletitas de agua por tres unidades, una cajita de flan, y 1 kilo de azúcar.

Desde junio hasta diciembre la cantidad de módulos alimentarios a repartir se incrementa debido principalmente a la demanda de comida, alcanzando a más de 200 en diciembre 2020. En el 2021 se le agrega al popularmente denominado “bolsón” alimentario que entrega la escuela dos kilos de fruta de estación y tres kilos de verdura (zanahoria, papa y

cebolla). En este año la totalidad de los 370 alumnos del nivel inicial reciben el bolsón de alimentos.

Desde su instauración durante la ASPO, el bolsón se convirtió en un instrumento privilegiado de política. Su origen (en este caso provincial, pero también los hubo de origen municipales o entregados por organizaciones sociales cuya proveniencia era nacional), sin embargo, presentó, en numerosas oportunidades, fuertes disputas no solamente para capitalizar la gratitud y el reconocimiento de los beneficiarios hacia quienes los distribuían. En el caso que más he estudiado, a través de entrevistas con representantes de la CTEP, la coordinación con el gobierno nacional, específicamente con el ministerio de desarrollo social, fue en los primeros tiempos del ASPO no solamente ardua sino también por momentos inexistente. Según se nos manifestara en varias oportunidades y por varios representantes de distintas organizaciones sociales, secretarios de la municipalidad de Paraná y de la gobernación, la asistencia alimentaria durante las primeras semanas de la ASPO no solamente no se vehiculizó por los canales oficiales, sino que su ausencia se caracterizó por el silencio oficial y la incertidumbre de las fechas de entrega.

La limitación de la movilidad de estas poblaciones a sus barrios presupuso, a veces con razón, carencias de infraestructura en los hogares. La alimentación apareció como una de las certezas a futuro que el estado previó para “conte-

ner” a los sectores más necesitados. Esta “contención” se implementó mediante una complementación de las transferencias monetarias (que a su vez fueron incrementadas en cantidad y en montos) con transferencias de alimentos y así se protegió o intentó proteger al resto de la sociedad, no solamente de la posibilidad de contagios provenientes de las clases más bajas, sino también de los saqueos que supuestas hordas de ciudadanos necesitados podrían producir por fuera de sus enclaves de pobreza. Que los pobres no se movilizan o que solamente lo hagan de acuerdo con los intereses de los dirigentes, aseguró a estos últimos un sentido para la entrega de dinero y alimentos gratis.

ILEGIBILIDADES DEL ESTADO

Al promover la legibilidad de su población, los estados han perseguido sus propios objetivos de gobierno (Scott 1998 y 2017). Como bien lo describen Buitron y Steinmüller (2021),

En el argumento de Scott, los funcionarios estatales encargados de crear y mantener la legibilidad del estado generalmente tienden a descuidar el conocimiento práctico (la metis) de los plebeyos. Por la misma razón, muchos proyectos estatales sobresalientes finalmente fracasan. Sin embargo, lo que Scott ignora es cómo, exactamente, tanto el conocimiento de los funcionarios estatales como el de la gente común cambia en el proceso. (p. 42)

Si consideramos que la producción de legibilidad estatal es una de las funciones básicas del Estado, las cifras e índices pueden, por momentos, también volverse ilegibles. ¿Pero por qué y en qué momentos? En el caso argentino, la posibilidad del ejercicio del conocimiento práctico de gobierno, imposible de ser representado en términos de legibilidad del estado, crea gratuidades autoevidentes y opacas.

Los funcionarios entrevistados quienes, muchas veces, habían cumplido antes el rol de “piqueteros”, líderes y participantes de organizaciones sociales y representantes de los más pobres ejercieron un conocimiento plebeyo para distribuir gratuitamente bienes y servicios durante el ASPO. Este conocimiento práctico y “plebeyo” (a decir de Buitrón y Steinmüller pero también Forment, 2015) se puso al servicio del Estado, o por lo menos de la parcela del Estado a la que ellos pertenecían. Los cambios en la representación de la pobreza durante la pandemia se valieron de opacidades y legibilidades estatales, alternativamente, para justificar la gratuidad de las transferencias, en ese contexto y en términos de urgencias de la reproducción diaria de la vida de los pobres a corto plazo.

Las transferencias gratuitas refirieron, entonces, a necesidades urgentes pero invocadas *a priori*. Sus marcos temporales no permitieron horizontes más amplios que los del “día a día”. Además de los términos del muy corto plazo, aparece otra variable epistémica

que tiene que ver con la situación “territorial” y situada en un lugar preciso de la reproducción de la vida. La gratuidad de la distribución de recursos se justificó también por el “conocimiento del territorio” que los líderes tuvieron.

Singh (2022) ha descrito una buena parte de esta condición de posibilidad epistémica, cuando define “el privilegio epistemológico de los pobres” de la siguiente manera. Preconizada principalmente en la teología de la liberación:

Esta noción se basa en el sentido bíblico del favor y la presencia de Dios entre los pobres (p. ej., Mateo 25:31–46), así como en el principio del magisterio católico de la “opción preferencial por los pobres”. La posición extiende la idea de tal priorización de los pobres a una afirmación sobre dónde se encuentran la verdad, la claridad y, en algunos casos, la revelación. La afirmación es que las realidades del mundo y la sociedad se ven más claramente desde el punto de vista de los pobres. Quien quiera tener ojos para ver debe adoptar una posición al lado de los pobres y marginados para captar la verdad de la situación. No solo se puede vislumbrar el mundo con mayor claridad, sino que las verdades divinas se aprehenden con mayor precisión desde esta perspectiva. (Singh, 2022, p. 1072)

La primacía de la particularidad territorial (del barrio) y del cortoplacismo temporal (de la supervivencia día a día) termina por definir el sentido de las gratuidades estatales al hacerlas de-

pende del privilegio epistemológico de los pobres cuando sus líderes barriales producen legibilidades u opacidades estatales de manera situada. El funcionario “plebeyo” oculta o descubre, según su conveniencia específica, aspectos de un mismo fenómeno según quiera representar o dejar de representar donaciones y asignaciones de recursos *in situ*.

Si bien y como sugiere Ann Stoler (2009), “James Scott persuasivamente argumenta que los subalternos usan las transcripciones oficiales de las élites mientras mantienen registros ocultos para sí mismos” (p. 186), nadie puede asegurar que, ellos mismo y a veces, no se pierdan en la traducción entre registros. Al pasar de la creación de legibilidades u opacidades estatales, según la conveniencia del funcionario y líder de la organización social, a la repetición de un patrón en el que la representación se estabiliza, las gratuidades alimentarias estatalmente reproducidas, más allá de ser fenómenos opacos o legibles cuantitativa o cualitativamente, responden a una economía de la representación en la que la anomia (y la representación de una ausencia de representación) cumple funciones políticas. La producción de anomia no solamente responde a intereses situados, tácticos, por decirlo de alguna manera, en la asignación de recursos. Por lo general también responde a un sentido altruista de la gratuidad estatal se embandera en contra del mercado. En definitiva, se trata de un marco general de equivalencias (gratis=estatal=bueno versus precio=privado=malo)

que permite no solamente la cosmogonía del estado argentino como productor de gratuidades, sino a las anomias situadas por las cuales se reasignan convenientemente los recursos.

James Ferguson (2022) describió a los reclamos de “la política proletaria” contemporánea más que con su poder de desestabilización y de restitución de derechos ciudadanos conculcados, por su contribución laboral a la empresa capitalista del estado-nación. Sin embargo, en el caso argentino, es el Estado el que se adscribe capacidades extraordinarias de representación cuando representa al pobre. Y no lo hace para contribuir directamente a la empresa capitalista sino para establecerse primero como actor necesario de la misma. Así, el conocimiento práctico o *métis* plebeya del Estado es usada para hacer ilegible u opacos la distribución de recursos, utilizando lógicas de la gratuidad estatal creativamente.

Al provocar silencios intencionales o errores de comunicación política, burocracias plebeyas reafirman “internas” dentro fuera del frente gobernante y pertenencias disímiles. En las implementaciones de las políticas alimentarias de emergencia, estas anomalías se pueden interpretar como sospechas intencionadas o errores aleatorios. Sin embargo, en términos de la antropología del estado, se las puede considerar como eventos anómalos que permiten distinguir entre *insiders* y *outsiders* de una determinada burocracia (Herzfeld, 1992). Dichas anomalías están profundamente relacio-

nadas con la gran clase de fenómenos que han sido denominados, por lo menos desde Sidicaro (2015) como anomias argentinas: distribuir comida por temor a un alzamiento popular y sus consecuentes saqueos.

CONCLUSIÓN: ALIMENTOS GRATIS, INMOVILIZACIONES, ANOMIAS ECONÓMICAS Y ANTIECONOMÍAS ARGENTINAS

Las transferencias alimentarias y monetarias se constituyeron en un fuerte apoyo que permitió no solamente sortear las dificultades que la improvisación de la gestión de la pandemia trajo consigo. También ayudaron, en algunos casos, a acumular reservas monetarias en hogares pobres que luego se transformaron en inversión en infraestructura. Mientras que el Estado intentó separar a la economía de la vida durante los meses en los que inmovilizó a gran parte de la población, la mayor parte de la misma sobrevivió probando distintas combinatorias entre una y otra.

Sin embargo, no trato, en este escrito, de evaluar la efectividad del accionar coordinado desde el estado, sino, como lo sostienen Oliver-Smith y Hoffman (2002), de describir cómo “los desastres desenmascaran la naturaleza de una estructura social” determinada (p. 9) y de “exponer” situaciones que hasta el momento de la pandemia habían quedado como puntos ciegos de nuestra visión (Fassin y Fourcade, 2021, p. 5).

En Argentina aparecieron retornos a un pasado idealizado en el cual no era

necesario el mercado y la distribución de comida se hacía verticalmente, desde dependencias del estado a los ciudadanos. A veces, dicha distribución directa de comida y recursos indicó el temor de algunos dirigentes a un desborde social, en los barrios más vulnerables, pero siempre emergió como un imperativo moral que se justifica el dar comida a los pobres: la supervivencia. Así, el estado de emergencia COVID-19 se transformó en un mal conocido, en una crisis socio-alimentaria en ciernes. El poder ejecutivo nacional, buscando un poco de certidumbre, dirigió una buena parte de sus recursos a atenderla, como si se tratara de evitar una crisis recurrente. Al mismo tiempo que aparecían los resultados acumulados de las “crisis rutinarias” de desigualdades producidas, paradójicamente, en nombre de la “solidaridad” y de “prácticas distributivas igualitarias” (Muir, 2021, p. 12), la previsión la crisis socio-alimentarias que el COVID traería a los más vulnerables incentivó anomalías anti-mercantiles, anomías que los argentinos prefieren representar como respuestas básicas que el estado brinda ante las reiterativas crisis económicas, más específicamente, mediante un tipo de gratuidad estatalmente producida.

Tanto las medidas políticas de confinamiento y de restricción de la movilidad como la reproducción alimentaria de los sectores más vulnerables fueron, contra el ideal autogestivo de las organizaciones que se autodenominan “movimientos sociales”, cuestiones de estado. Sin embargo, muchas de estas

organizaciones, aliadas o no al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, representaron a gente que no quiere ser representada como pobre, ni quiere ser pobre o estar agradecida a dadores de bolsones alimentarios. Como lo sostuviera Arjun Appadurai (2020) en un breve texto sobre el estado de excepción COVID-19, son las sociedades las deben confiar en sí mismas para lograr sus supervivencias.

Las políticas estatales anti-mercantiles (y hasta cierto punto antieconómicas) de transferencias gratuitas no solamente redujeron a amplias poblaciones a una vida sin intercambios comerciales regulares con el exterior de los barrios por unos meses, inmovilizándolas: también incentivaron el disgusto por la normalización de las transferencias a la pobreza en la post-pandemia. En esos sectores parece haberse encontrado un límite a gestión estatal de la pobreza (o de la “administración de la pobreza”, Agudo Sanchíz, 2015).

El resultado del manejo de la crisis de protección social y alimentaria durante la pandemia, además de ayudar a identificar ciertas anomalías argentinas, esclareció algunas anomías económicas recurrentes. Dicha identificación podría producir una nueva economización de la vida de los pobres, es decir, un retorno a las prácticas comerciales independientes (y hasta recalcitrantes) de cualquier formalidad estatal. Las medidas gubernamentales implementadas, las instituciones estatales como la escuela, los ministerios de desarrollo de los tres niveles

(nacional, provincial y municipal) perdieron protagonismo ante organizaciones sociales que, en comunicación directa con el ejecutivo nacional, pudieron gestionar recursos con mayor autonomía y potenciar su poder político *vis-à-vis* sus competidores internos. Dicha atomización de la gestión de la emergencia podría dejar lugar, en un futuro cercano, a un nuevo movimiento de fisión social que independizara a individuos o grupos sociales de los fines meramente electoralistas.

REFERENCIAS

- Adair, J. (2020). *In Search of the Lost Decade: Everyday Rights in Post-Dictatorship Argentina*. University of California Press.
- Agamben, G. (2005). *State of Exception*. University of Chicago Press.
- Agamben, G. (2020). The Invention of an Epidemic. *Quodlibet*. <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia>
- Agudo Sanchíz, A. (2015). *Una Etnografía de la Administración de la Pobreza. La Producción Social de los Programas de Desarrollo*. Universidad Iberoamericana.
- Appadurai, A. (2020), The COVID exception. *Social Anthropology*, 28, pp. 221-222. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12898>
- Buitron, N. y Steinmüller, H. (2021). State Legibility and Mind Legibility in the Original Political Society. *Religion and Society*. 12, (1), pp. 39-55. <https://doi.org/10.3167/arrs.2021.120104>
- Slipczuk, M. (2 de agosto de 2019). ¿Qué fue la intervención del INDEC y cómo impactó en los datos? *Chequeado*. <https://chequeado.com/el-explicador/que-fue-la-intervencion-del-indec-y-como-impacto-en-los-datos/>
- Chomsky, N. (28 de marzo de 2020). *Noam Chomsky: Coronavirus – What Is at Stake? Interview by Srečko Horvat*. *DiEM25 TV*. [Archivo de video] YouTube, 32: 56. <https://www.youtube.com/watch?v=t-N3In2rLI4>.
- Dapuez, A. (2023). Capital deprivation, assets, and the Universal Child Allowance for Social Protection in a Paraná slum, Argentina. *J R Anthropol Inst*, 29, pp. 183-201. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.13869>.
- Herzfeld, M. (1992). *The Social Production of Indifference. Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy*. University of Chicago Press.
- Hirsch, S., Mastrangelo, A. (13 de mayo de 2021). Enfrentando la pandemia: examinando el rol de los movimientos y organizaciones sociales en Argentina. *Somatosphere*. <http://somatosphere.net/2021/covid-19-social-movements-argentina.html/>
- Fassin, D. (2012). *Humanitarian Reason: A Moral History of the Present*. University of California Press.
- Fassin, D. y Fourcade, M. (2021). Introduction: Exposing and Being Exposed. En M. Fassin y Marion Fourcade (Ed.), *Pandemic Exposures Economy and Society in the Time of Coronavirus*. HAU Press

- y University of Chicago Press.
- Ferguson, J. (2022). Política proletaria hoy. Sobre los peligros y las posibilidades de la analogía histórica. *Etnografías Contemporáneas* Dossier: *Antropología del capital*. 8 (14), pp. 132-152.
- Fernández, A. (23 de marzo de 2020). Alberto Fernández: "Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida". *Diario Perfil*. <https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-si-el-dilema-es-la-economia-o-la-vida-yo-elijo-la-vida.phtml>
- Forment, C. A. (2015). Emergent Forms of Plebeian Citizenship: Everyday Ethical Practices in Buenos Aires's La Salada's Market. *Current Anthropology* 56 (11), pp. 115–125.
- Koselleck, R. (2006) Crisis. Translated by Michaela W. Richter. *Journal of the History of Ideas* 2 (67), pp. 357–400.
- Lacan, J. (2008). [1964] *El Seminario de Jacques Lacan, Libro II*. Paidós
- Murillo, M.V., Oliveros, V. & Zarazaga, R. (2021). The Most Vulnerable Poor: Clientelism Among Slum Dwellers. *Studies in Comparative International Development*, 56, pp. 343–363. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09324-x>
- Muir, S. (2021). *Routine Crisis. An Ethnography of Disillusion*. The University of Chicago Press.
- Neiburg, F. (2020). El daño de las pandemias. *Anfibia*, 12, <https://www.revistaanfibia.com/dano-las-pandemias/>
- Roitman, J. (2013). *Anti-Crisis*. Duke University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (2017) *Against the Grain: A Deep History of the Earliest States*. Yale University Press.
- Sicairo, R. (2015). Las anomias argentinas. *Apuntes de Investigación del CECYP, 2015*, (26), pp. 120-134.
- Singh, D. (2022). "Class," en W. Schweiker, et al, W. Blackwell (ed.), *Encyclopedia of Religious Ethics* (pp. 1068-1076).
- Stoler, A. (2009). *Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton University Press.
- Telam. (23 de febrero de 2021). Sobreseyeron al ministro Arroyo por una compra de alimentos no concretada. *Telam Digital*. <https://www.telam.com.ar/notas/202102/545385-sobreseyeron-arroyo-compra-alimentos-no-concretada.html>
- Trnka, S. (2021). BE KIND: Negotiating Ethical Proximities in Aotearoa/New Zealand during COVID-19. *Cultural Anthropology*, 3 (36), pp. 368-380. <https://doi.org/10.14506/ca36.3.04>
- Visakovsky, S.E. and Zenobi, D.S. (2020). When a crisis is embedded in another crisis. *Social Anthropology*, 28(2), pp. 379-380. <https://doi.org/10.1111/1469-8676.12836>